



Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Apelaciones Resistencia – Secretaría Penal N° 2-

Resistencia, a los dieciséis días del mes de mayo del año dos mil veinticinco.

VISTO:

El presente Expte. N° **FRE 11335/2019/30/CA6** caratulado **“LEGAJO DE APELACIÓN EN AUTOS: LÓPEZ, DANIEL ORLANDO POR INFRACCIÓN ART. 303 INC. 2 A, ASOCIACIÓN ILÍCITA, DEFRAUDACIÓN CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”**, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia.

RESULTA:

1.- Que arriban los autos a esta Alzada en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Dra. Gabriela Tomljenovic, en representación de Daniel Orlando López, contra lo resuelto por el Juez de la anterior instancia en cuanto dispuso no hacer lugar a la suspensión de la acción penal, por la adhesión a la Ley de Blanqueo (N° 27.743) y al cese de la prisión preventiva solicitada por la Defensa técnica del imputado.

2.- Para decidir, en síntesis, el Juez de anterior grado -en consonancia con lo dictaminado por el Ministerio Público Fiscal-, señaló que el beneficio previsto por el art. 5 de la Ley N° 27.743 de "suspensión de la acción penal", opera exclusivamente para los supuestos de casos de acciones "penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social".

Manifestó que en dichos beneficios, el Estado renuncia a continuar con la acción penal ante acciones que involucran tipos tributarios, aduaneros y de seguridad social, quedando totalmente excluidos otros delitos, en razón de que dicha norma es de carácter específico.

Puntualizó que el solicitante se encuentra procesado por el delito de lavado de activos, llevado a cabo con habitualidad y como organización (art. 303 inc. 1 y 2 "a" del CP), y no por delitos tributarios, aduaneros o de los recursos de la seguridad social, al menos hasta el momento.

Refirió que la tipicidad de los delitos contra el orden económico y financiero, posee autonomía respecto de los delitos determinados en el Régimen Penal Tributario, por lo que no resulta viable el beneficio de suspensión del proceso penal contemplado en el art. 5 de la Ley N° 27.743.

Sostuvo, además, que de conformidad con lo expuesto por el Fiscal Federal, la acción penal pública será ejercida por el Ministerio Fiscal y su ejercicio no podrá suspenderse, interrumpirse ni hacerse cesar, excepto en los casos expresamente previstos por la ley, lo que denota el carácter restrictivo con el que deben interpretarse y aplicarse las normas que regulan la suspensión, interrupción y extinción de la acción penal pública.

Finalmente, advirtió la situación de López no ha mutado por lo que -de momento- no procede hacer lugar al cese de la prisión preventiva solicitado.

3.- Disconforme con dicha decisión la Dra. Gabriela Tomljenovic interpuso recurso de apelación, por considerar que la misma contiene una fundamentación aparente, mediante la utilización de transcripciones normativas y de interpretaciones subjetivas.



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente



Alegó que el Magistrado realizó un análisis deficiente de los hechos atribuidos, lo que acarrea la errónea imputación de delitos penales y que omitió analizar material probatorio que demostraría el origen lícito de fondos y de las actividades comerciales.

Sostuvo que se han violado los principios de ley penal más benigna, inocencia e igualdad ante la ley.

Finalmente, destacó la inexistencia de valoración de riesgos procesales para desestimar el cese de prisión preventiva solicitado.

4.- Concedido el remedio procesal deducido, se radican las actuaciones ante esta Alzada. Al contestar la vista conferida el Sr. Fiscal General manifiesta su no adhesión al planteo defensivo incoado.

Habiéndose cumplimentado con el pertinente trámite de ley, se notifica a las partes la fecha de celebración de la audiencia para la presentación virtual del memorial sustitutivo del informe oral (art. 454 del CPPN), de conformidad a la opción formulada por la recurrente.

Continuando el trámite impugnativo, se agrega el libelo digital presentado por los representantes técnicos del imputado, a través del cual reiteran y mantienen, en lo sustancial, los agravios expuestos al momento de apelar.

Quedan así los autos en condiciones de ser resueltos.

Y CONSIDERANDO:

I.- Ahora bien, habilitada la jurisdicción del Tribunal y configurado el objeto de conocimiento, corresponde el examen de las cuestiones ventiladas.

En esa tarea, deviene necesario recalcar –como lo sostuvo reiteradamente este Tribunal– que la indicación de los motivos específicos sobre los que se basa el remedio procesal puesto a conocimiento de esta Alzada, determinan el ámbito del agravio y el consecuente límite del recurso y de su propia competencia (artículos 438, 445, primer párrafo y 454, tercer párrafo del CPPN).

Por lo demás, cabe recordar que los/as jueces/as no están obligados a seguir todos y cada uno de los agravios expresados, sino a atender a aquéllos que se estiman conducentes para resolver la cuestión (Fallos: 311:340; 322:270; 327:525; 329:3373; 331:2077).

II.- Yendo al núcleo de la cuestión que nos ocupa cabe precisar que la Ley N° 27.743 (en vigencia desde el 08/07/2024), estableció un Régimen de Regularización de Activos, comúnmente conocido como "Blanqueo", que busca incentivar a los contribuyentes a declarar activos no registrados.

Puntualmente, en lo que aquí interesa, el artículo 5° dispone que el acogimiento al régimen que establece producirá la suspensión de las acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social en curso y la interrupción del curso de la prescripción penal, aún cuando no se hubiera efectuado la denuncia penal a ese momento o cualquiera sea la etapa del proceso en que se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere sentencia firme.

Dicho instituto representa un salvataje para los contribuyentes, con la condonación de una obligación tributaria y la consecuente inmunidad de enjuiciamiento penal, sin

Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente





Poder Judicial de la Nación

Cámara Federal de Apelaciones Resistencia – Secretaría Penal N° 2-

embargo, no puede obviarse que -adicionalmente- acarrea beneficios para la Administración, ya que genera un fuerte aumento en los ingresos fiscales y una mejora en el cumplimiento futuro de las obligaciones tributarias.

En términos jurídicos, el Alto Tribunal tiene dicho en causas similares donde se ha tratado el instituto en cuestión, que se traduce en el “olvido de un hecho delictuoso para establecer la calma y la concordia social”, “extingue la acción y la pena si antes hubiese sido impuesta y borra la criminalidad del hecho” (CSJN, Fallo 178:377, entre otros).

Asimismo, desde la óptica de la dogmática penal el beneficio no se limita a una exención de sanción, sino que acarrea la eliminación de la tipicidad del hecho objeto de la amnistía, neutralizando la pretensión punitiva (Cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl - Aliaga, Alejandro - Slokar, Alejandro, Derecho Penal, Parte General, Buenos Aires, 2002, Ed. Ediar, pág. 125); en tanto el pago implica la extinción de la acción penal. Es decir, la eficacia de esta política tributaria depende en gran medida de la amnistía efectiva de las acciones penales.

La reseñada naturaleza jurídica del beneficio explica porqué la aplicación del mismo se encuentra limitada a acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social, las cuales no tienen ningún tipo de atinencia al caso de autos, en virtud de que Daniel Orlando López cuenta con auto de procesamiento firme en su contra por la comisión del delito de lavado de activos, llevado a cabo con habitualidad y como organización, previsto y reprimido por el art. 303 inc. 1 y 2 "a" del Código Penal (Resolución de fecha 09/10/2024, situación procesal confirmada por esta Alzada en fecha 14/11/2024, en el Expte. N° FRE 11335/2019/24/CA3 caratulado: "Legajo de Apelación En Autos: López, Ramón Alberto; Romero, Librada Beatriz; López, David Alberto; López, Walter Ramón; y Otros Por Infracción Art. 303 Inc. 2 A, Asociación Ilícita, Defraudación contra la Administración Pública").

A dicha decisión remitimos en honor a la brevedad y por encontrarse allí contestados algunos agravios que la Defensa reedita, tales como valoración del material probatorio y el análisis de los hechos imputados al encartado e integrantes de su familia. Ello, toda vez que en la especie la autoría provisoria y la configuración del tipo delictivo de lavado de activos ya han sido analizados y resueltos por esta Alzada.

A más de ello, los argumentos esgrimidos por el recurrente no poseen la entidad pretendida desde que, como bien señaló el Ministerio Público Fiscal al momento de dictaminar, es determinante en la especie la improcedencia de la suspensión del proceso penal que se postula, al procurar extender los beneficios establecidos taxativamente a supuestos no previstos por la ley, toda vez que la naturaleza y características típicas del delito de lavado de dinero y demás conductas que atentan contra el orden económico y financiero establecidas en el Título XIII del Código Penal, se diferencian como “delitos autónomos” de aquellos tipificados en el Régimen Penal Tributario.

Así las cosas, debe quedar claro que en la presente investigación se pretende esclarecer la maniobra de lavado de activos, existiendo suficiencia probatoria para que la causa avance a distinta etapa procesal y tal decisión se encuentra firme. A ello debe



Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente



confrontarse que la normativa cuya aplicación pretende la Defensa alude a acciones penales tributarias, aduaneras y de los recursos de la seguridad social y, como se dijo, no es el caso.

Y en este sentido, resulta de aplicación la inveterada jurisprudencia de la Corte que, frente a diversas circunstancias y en distintas épocas, ha sostenido que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra y que cuando esta es clara y no exige mayor esfuerzo interpretativo, no cabe sino su directa aplicación, con prescindencia de consideraciones que excedan las circunstancias del caso expresamente contempladas por la norma (Fallos: 344 :3156; 345:1086; 346:25; 346:683 y 346:1501, entre muchos otros).

Por lo tanto, la contundencia y especificidad de la normativa cuestionada -Ley N° 27.743- sumada a la naturaleza jurídica del instituto en trato, nos exime de mayores consideraciones, por lo que debe confirmarse lo resuelto por el Magistrado de la anterior instancia.

III.- Por lo demás, respecto del agravio vinculado al cese de la prisión preventiva cabe señalar que, a pesar del esfuerzo argumentativo por parte de la Defensa, el Magistrado consideró que la situación de Daniel Orlando López no ha variado desde la última consideración de la cautelar dispuesta, encontrándose la prisión preventiva dentro del plazo establecido por la Ley N° 24.390.

Sin perjuicio de ello, en orden a la consideración de los riesgos procesales, la presente incidencia excede ese aspecto y no cuenta esta Alzada con los elementos pertinentes para su evaluación, por lo que cabe señalar que la Defensa cuenta con la vía incidental pertinente para formular los pedidos que estime respecto a la libertad de su defendido.

Por lo expuesto, el Tribunal por mayoría (art. 31 bis in fine CPPN) **RESUELVE:**

1°) NO HACER LUGAR al recurso de apelación deducido por la Defensa técnica de Daniel Orlando López, y consecuentemente, **CONFIRMAR** la resolución dictada por el Juez de anterior grado, en todo cuanto fuera motivo de agravio.

2°) Comunicar al Centro de Información Judicial, dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (conforme Acordada N° 5/2019 de ese Tribunal).

3°) Regístrese, notifíquese y líbrese DEO al Juzgado de origen. Fecho, previo cumplimiento del plazo de ley, devuélvanse mediante pase digital.

Piense Antes De Imprimir. Ahorrar Papel Es Cuidar El Medioambiente

